PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA XXV LEGISLATURA
22 OCT 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROCESOS PARLAMENTARIOS

APROBADO EN VOTACION NOMINAL CON
18 VOTOS A FAVOR
0 VOTOS EN CONTRA
2 ABSTENCIONES

DICTAMEN No. 32 DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA RESPECTO DE LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON EL OBJETO DE CREAR EL DELITO DE SUMISIÓN QUÍMICA, PRESENTADAS EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025 Y 01 DE JUNIO DE 2026.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativas que adicionan diversos artículos al Código Penal para el Estado de Baja California, presentadas por el Diputado Ramón Vázquez Valadez y la Diputada Adriana Padilla Mendoza, con el objeto ambas de crear el delito de sumisión química, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 56, fracción VII y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado **"Fundamento"** se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado **"Antecedentes Legislativos"** se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado **"Contenido de la Reforma"** se compone de dos capítulos, el primero denominado **"Exposición de motivos"** en el que se hace una transcripción de los motivos, fundamentos y razones que impulsaron al legislador. Por su parte el capítulo denominado **"Cuadro Comparativo"** se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado **"Análisis de constitucionalidad"** se realiza un estudio de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de **"Consideraciones y fundamentos"** las y los integrantes de este órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del presente dictamen.

VI. En el apartado de **"Propuestas de modificación"** se describe puntualmente las adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.

VII. En el apartado de **"Régimen Transitorio"** se describen puntualmente las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al resolutivo.

VIII. En el apartado denominado **"Impacto Regulatorio"** se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen.

IX. En el apartado denominado **"Resolutivo"** se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción VII, 57, 60, 90, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Justicia es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se abocó al análisis discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedentes Legislativos.

1. En fecha 20 de octubre de 2025, el Diputado Ramón Vázquez Valadez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, iniciativa por la que se adiciona un Capítulo IX denominado "DE LA SUMISIÓN QUÍMICA", así como los artículos 160 TER y 160 QUARTER al Código Penal para el Estado de Baja California.

2. En fecha 01 de junio de 2026, la Diputada Adriana Padilla Mendoza, presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, iniciativa por la que se adicionan los artículos 163, 163 BIS y 163 TER al Código Penal para el Estado de Baja California.

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a las iniciativas mencionadas.

4. En fecha 05 de noviembre de 2025, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa oficio XXV-AP-657-2025, signado por la Presidenta de la Comisión de Justicia mediante el cual acompañó la iniciativa señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

5. En fecha 12 de junio de 2026, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa oficio XXV-AP-382-2026, signado por la Presidenta de la Comisión de Justicia mediante el cual acompañó la iniciativa señalada en el numeral 2 de esta sección, con la finalidad de elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.

6. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS, en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposición de motivos.

Iniciativa identificada en el numeral 1, de los antecedentes legislativos. Inicialista Diputado Ramón Vázquez Valadez:

> México ha enfrentado en las últimas décadas un incremento sostenido de delitos de alto impacto. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan que, aunque en algunos rubros se ha registrado una ligera disminución, delitos como la extorsión, el fraude, el homicidio y los delitos sexuales mantienen cifras alarmantes.
>
> La delincuencia en México constituye uno de los mayores desafíos en materia de seguridad, justicia y gobernabilidad. Los delitos convencionales como el robo, la extorsión, el secuestro o

el homicidio han estado presentes desde hace décadas y se han convertido en fenómenos profundamente arraigados en el tejido social. Sin embargo, en los últimos años, la dinámica del crimen organizado y la delincuencia común ha evolucionado hacia nuevas formas de violencia y control, valiéndose de tecnologías, mecanismos psicológicos y químicos que ponen en riesgo la integridad de las personas. Entre estas nuevas modalidades se encuentra la denominada sumisión química, un método en el que, mediante la administración de sustancias psicoactivas sin consentimiento, se anula la voluntad de las víctimas para cometer delitos en su contra.

El crimen organizado ya no solo se centra en el narcotráfico, sino que ha extendido sus operaciones a la trata de personas, el tráfico de migrantes, la ciberdelincuencia, el cobro de piso y los delitos patrimoniales, un elemento que distingue la evolución reciente de la delincuencia en México es la innovación criminal, la globalización, el acceso a nuevas sustancias, los avances tecnológicos y la interconexión digital han permitido a grupos delictivos diseñar métodos más sofisticados y difíciles de combatir, como son:

- Ciberdelincuencia y fraudes electrónicos, que aprovechan la digitalización de la vida cotidiana.

- Delitos con técnicas psicológicas, como el engaño profesional o la simulación de accidentes para extorsionar.

- Uso de sustancias químicas para vulnerar a las víctimas, ya sea en delitos sexuales, robos o secuestros.

Dentro de esta última categoría destaca la sumisión química, fenómeno emergente que plantea importantes retos de identificación, prevención y sanción.

La aparición de nuevas conductas delictivas como la sumisión química representan un reto adicional tanto en la tipificación penal como en la prevención social.

La sumisión química es un acto delictivo en el cual se administran a una persona sustancias psicoactivas, narcóticas o similares sin su consentimiento, con el propósito de disminuir o anular su voluntad, su memoria y su capacidad de resistirse, estas sustancias suelen disolverse en bebidas o alimentos porque son incoloras e insípidas; producen sedación, amnesia, desorientación y aturdimiento, y desaparecen rápidamente del cuerpo, lo que dificulta su detección y, por ende, su persecución legal.

Un estudio del Grupo de Investigación en Sumisión Química de Cataluña indica que más del 30% de las víctimas de abuso sexual habían sido drogadas, mientras que una encuesta de la American Psychological Association de 2016 reveló que el 80% de estudiantes universitarias en Estados Unidos afirmó haber sido drogada sin saberlo. Aunque en México no existen estadísticas oficiales precisas, estos datos evidencian la magnitud del problema y las dificultades para denunciar debido a la pérdida de memoria y al estigma social.

En el caso de México, se han documentado un sinfín de casos de este tipo convirtiéndolo en una nueva modalidad delictiva, en el que si bien al principio se utilizó para temas de índole sexual en la actualidad se presenta en secuestros exprés, robos, etc.

En Baja California, por su ubicación fronteriza y dinámica social, la sumisión química reviste características particulares:

Ciudades como Tijuana, Mexicali y Rosarito reciben diariamente miles de visitantes nacionales y extranjeros, lo que genera un entorno propicio para el consumo de alcohol en bares, discotecas y conciertos masivos. Estas condiciones han facilitado que, en los últimos años, circulen testimonios en medios locales y redes sociales de personas intoxicadas sin su consentimiento en dichos espacios.

En Tijuana, colectivos feministas como "Yo Sí Te Creo" han denunciado casos de mujeres intoxicadas en bares de la Zona Centro y la Zona Río, quienes después sufrieron robos o intentos de agresión sexual.

En Mexicali, medios locales han reportado incidentes en los que jóvenes salieron de bares y presentaron síntomas de intoxicación lo que derivó en hospitalizaciones de urgencia. En Rosarito, se han reportado casos en eventos masivos de música electrónica donde asistentes fueron drogados sin percatarse, confirmando un patrón de riesgo en ambientes de alta concentración juvenil.

Baja California ocupa los primeros lugares nacionales en consumo de alcohol y drogas ilícitas, lo que genera un escenario de normalización del consumo en la vida nocturna. Este contexto facilita la introducción de sustancias sin consentimiento, pues la víctima puede atribuir sus síntomas a una ingesta excesiva de alcohol y no a un ataque intencional.

Si bien no siempre se denuncian formalmente, organizaciones civiles y medios locales han documentado testimonios que muestran un patrón de agresiones que van desde el robo hasta intentos de violencia sexual, dejando a las víctimas en estado de indefensión jurídica. Diversos estados ya han legislado sobre esta problemática.

Sonora tipificó en 2023 el delito de sumisión química con sanciones de 4 a 10 años de prisión y estableció obligaciones para bares de contar con protocolos de prevención. Yucatán lo incorporó en 2024, imponiendo penas de hasta 7 años de prisión. Puebla lo reconoció como equivalente a violación cuando existe contacto sexual sin consentimiento bajo estado de intoxicación química.

(Ofrece tabla informativa)

Baja California, al no contar todavía con una figura jurídica autónoma, corre el riesgo de que estas conductas queden impunes o se castiguen de manera insuficiente al subsumirlas únicamente en delitos como violación, abuso sexual sin tomar en cuenta el desvalor específico de anular la voluntad de la víctima mediante sustancias químicas en la comisión de otros delitos

Desde una perspectiva de derechos humanos, la sumisión química constituye una grave vulneración a la dignidad, la autonomía y la integridad personal.

El artículo 1° constitucional obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos; el artículo 19 garantiza la legalidad, y el artículo 20 en su apartado C protege la dignidad y autonomía de las víctimas en el proceso penal.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce como violencia sexual toda acción que limite o anule el consentimiento, supuesto en el que encaja plenamente la sumisión química.

Legislar este delito en Baja California constituye un avance significativo ya que con las modificaciones propuestas se lograría lo siguiente:

- Visibilizar un problema real. Los testimonios locales muestran que existen conductas que emplean drogas para robar o agredir sexualmente, y que hoy no son sancionadas de manera autónoma.

- Aumentar el desvalor jurídico. La anulación de la voluntad mediante sustancias no puede equipararse únicamente al resultado delictivo (violación o robo); merece un tipo penal propio que sancione el acto en sí mismo ya que pudiera causar inclusive hasta la muerte de la víctima.

- Armonizar con la tendencia nacional. Estados como Sonora, Yucatán, Puebla y la Ciudad de México ya tipificaron esta conducta, reconociendo su gravedad.

- Reforzar la prevención y la seguridad pública. Incorporar medidas para que bares, centros nocturnos y espacios recreativos cuenten con protocolos y dispositivos de detección contribuirá a proteger a la población joven y universitaria, altamente vulnerable.

- Proteger la dignidad y autonomía de las personas. Tipificar la sumisión química en el Código Penal de Baja California reafirma el compromiso del Estado con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La creación de un tipo penal autónomo en el Código Penal de Baja California, así como la incorporación de agravantes en delitos sexuales y patrimoniales cuando se empleen estas sustancias, cerrará una laguna legal, permitirá sancionar proporcionalmente a los responsables y enviará un mensaje claro de cero tolerancias a esta forma de violencia.

Actualmente, el Código Penal de Baja California no contempla la sumisión química como delito autónomo, y en la práctica, las conductas se encuadran como violación, abuso sexual, robo o lesiones, pero sin reconocer la gravedad de la acción de anular la voluntad de la víctima mediante sustancias y sin reconocer que pueden causarles la muerte a las víctimas.

Esto provoca subregistro e impunidad, ya que muchas denuncias no prosperan por falta de pruebas toxicológicas oportunas. La sumisión química representa una amenaza creciente que requiere respuesta inmediata del legislador bajacaliforniano, adoptar una figura penal específica fortalecerá la protección a la integridad y dignidad de las personas en nuestra entidad, al tiempo que se alinea con las mejores prácticas de derecho comparado en México.

La delincuencia en México es un fenómeno complejo, dinámico y en constante transformación, el surgimiento de nuevas modalidades como la sumisión química evidencia la capacidad de los delincuentes para adaptarse y explotar vulnerabilidades sociales.

Frente a este escenario, el Estado mexicano tiene la obligación de modernizar sus marcos normativos, fortalecer la capacitación institucional y diseñar políticas públicas de prevención que pongan en el centro la protección de la dignidad y los derechos humanos, la sociedad también juega un papel fundamental: la denuncia, la visibilización del problema y la exigencia de justicia son indispensables para frenar la impunidad. En el caso de la sumisión química, se requiere un esfuerzo conjunto entre legisladores, autoridades, sociedad civil y ciudadanía para reconocer, prevenir y sancionar esta conducta, garantizando así un entorno más seguro y respetuoso para todas y todos.

(Ofrece cuadro comparativo)

Iniciativa identificada en el numeral 2, de los antecedentes legislativos. Inicialista Diputada Adriana Padilla Mendoza:

La protección de la integridad física, psicológica y de la libertad personal constituye una obligación esencial del Estado mexicano y un deber constitucional ineludible de todas las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, la prevención del delito y el acceso efectivo a la justicia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 20 y 21 los derechos humanos relativos a la dignidad, libertad, seguridad. integridad personal y protección de la salud, imponiendo a todas las autoridades la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos, bajo los principios de universalidad , interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, establecen el deber de adoptar medidas legislativas eficaces para prevenir y sancionar toda forma de violencia que atente contra la libertad, la integridad física y psicológica y la seguridad de las personas, con especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En los últimos años, las dinámicas de la criminalidad han evolucionado hacia formas de violencia cada vez más sofisticadas, en las que no necesariamente se recurre a la fuerza física directa, sino a mecanismos de control que buscan neutralizar la voluntad de las víctimas. Entre estas conductas destaca la denominada sumisión química, consistente en la administración subrepticia o no consentida de sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, tóxicas o de efectos similares, con la finalidad de alterar, disminuir anular temporalmente la conciencia, la voluntad o la capacidad de resistencia de una persona, facilitando la comisión de otros delitos.

Esta práctica constituye una forma especialmente grave de violencia, toda vez que coloca a la víctima en un estado de indefensión absoluta, impidiéndole percibir adecuadamente los hechos, resistirse, solicitar auxilio recordar posteriormente lo ocurrido, lo que además dificulta de manera significativa la investigación y persecución penal.

La sumisión química ha sido identificada a nivel internacional como un mecanismo recurrente en la comisión de delitos sexuales, robos, secuestros, extorsiones, trata de personas, privación ilegal de la libertad y otras formas de violencia. En la práctica, las sustancias suelen ser administradas mediante bebidas, alimentos, medicamentos alterados, cigarrillos electrónicos u otros medios de consumo, aprovechando contextos de convivencia social, espacios de entretenimiento, centros nocturnos, hoteles, eventos masivos o incluso relaciones de confianza,

En México, distintas fiscalías, instituciones de salud y organizaciones de la sociedad civil han advertido un incremento de denuncias relacionadas con posibles casos de sumisión química, particularmente vinculados a delitos de naturaleza sexual y patrimonial. No obstante, uno de los principales problemas radica en la ausencia de un tipo penal autónomo que permita sancionar de manera específica la conducta consistente en administrar sustancias con la finalidad de anular o disminuir la voluntad de una persona, aun cuando el delito posterior no llegue a consumarse.

Actualmente, los códigos penales contemplan figuras como lesiones, abuso sexual violación, robo o privación ilegal de la libertad; sin embargo, la conducta previa de sometimiento químico suele quedar subsumida o invisibilizada dentro de otros tipos penales, lo que genera vacíos normativos, dificultades probatorias y limitaciones para una intervención oportuna y eficaz por parte del Estado.

La ausencia de regulación específica provoca que conductas de alta peligrosidad no sean plenamente visibilizadas ni sancionadas en su justa dimensión, a pesar de que la administración no consentida de sustancias constituye, por sí misma, una afectación grave a la libertad, la integridad personal y la autodeterminación de las víctimas.

En el caso de Baja California, esta problemática adquiere una relevancia particular derivada de sus características geográficas, sociales y económicas. Su condición fronteriza, intensa movilidad poblacional y la importante actividad turística y de entretenimiento nocturno incrementan los factores de riesgo asociados a este tipo de conductas. En municipios como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, convergen diariamente miles de personas en bares, centros nocturnos, restaurantes, hoteles y espacios de recreación, lo que genera escenarios propicios para la comisión de conductas de sometimiento químico.

En este contexto, se han documentado denuncias en las que, principalmente mujeres jóvenes, refieren haber sido víctimas de administración no consentida de sustancias en bebidas alimentos, derivando posteriormente en agresiones sexuales, robos, desapariciones temporales u otras formas de violencia. Sin embargo, la acreditación de estos hechos enfrenta importantes obstáculos derivados de la rápida metabolización de las sustancias, la falta de protocolos toxicológicos especializados y la inexistencia de un tipo penal especifico.

Diversas organizaciones civiles, colectivos especialistas en materia de seguridad y derechos humanos han advertido también el incremento de riesgos asociados al uso de sustancias incapacitantes en contextos de violencia de género, particularmente en espacios de convivencia social y establecimientos abiertos al público.

La presente iniciativa parte del reconocimiento de que la sumisión química constituye una conducta autónoma de alta peligrosidad, que debe ser sancionada independientemente del delito posterior que eventualmente se cometa. El bien jurídico tutelado no se limita a la salud física, sino que comprende la libertad personal, la autodeterminación, la integridad psicológica y la capacidad de decisión de la persona.

La teoría contemporánea del derecho penal reconoce la validez de los delitos de peligro cuando determinadas conductas generan una amenaza real, concreta e inmediata a bienes jurídicos fundamentales. En ese sentido, la administración no consentida de sustancias con fines delictivos constituye una puesta en peligro directa y grave que justifica plenamente la

intervención del derecho penal desde el momento de la conducta, sin necesidad de esperar la consumación de otros ilícitos.

En este sentido, la iniciativa propone adicionar al Código Penal para el Estado de Baja California el delito de sumisión química con fines delictivos, a fin de sancionar a quien administre, suministre o haga ingerir sustancias con el propósito de disminuir o anular la voluntad de una persona para facilitar la comisión de conductas ilícitas.

Asimismo, se prevén agravantes cuando la víctima sea mujer, niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad; cuando exista relación de confianza, autoridad o subordinación; cuando los hechos ocurran en establecimientos abiertos al público; cuando se utilicen sustancias de difícil detección toxicológica; o cuando la conducta tenga como finalidad la comisión. de delitos sexuales, trata de personas, secuestro, robo o feminicidio.

De igual forma, se establecen reglas de concurso de delitos para aquellos casos en los que, como consecuencia de la sumisión química, se cometan otros ilícitos, evitando vacíos de punibilidad y garantizando una adecuada respuesta del sistema penal.

Resulta indispensable que el orden jurídico evolucione frente a las nuevas formas de criminalidad, particularmente aquellas que emplean mecanismos de control químico para vulnerar la voluntad de las personas. La ausencia de violencia física visible no disminuye la gravedad de la conducta ni el impacto profundo que genera en las victimas.

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico penal del Estado de Baja California, cerrar vacíos legales existentes y dotar a las autoridades de herramientas eficaces para la prevención, investigación y sanción de la sumisión química con fines delictivos.

B. Cuadro Comparativo.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la y el inicialista, se presentan los siguientes cuadros comparativos:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

(Iniciativa 1 de los Antecedentes Legislativos: Diputado Ramón Vázquez Valadez)

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
CAPÍTULO IX **DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO**	**CAPITULO IX** **DE LA SUMISIÓN QUÍMICA**
ARTÍCULO 160 TER.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización al que por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, o II. Niegue o restrinja derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o	**Artículo 160 TER.** **Comete el delito de sumisión química quien, sin consentimiento de la víctima, administre, haga ingerir o suministre por cualquier medio sustancias psicoactivas, narcóticas o análogas, con el propósito de disminuir o anular su voluntad, memoria o capacidad de resistirse.** **A quien incurra en esta conducta se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.**

prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le podrá destituir e inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la pena impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Asimismo, se incrementará la pena en una mitad cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella.	
ARTÍCULO 160 QUATER.- Hostigamiento.- Al que de forma directa o indirecta, por cualquier medio físico, verbal, escrito, tecnológico o cibernético, asedie de forma dolosa a una persona con el fin de menoscabar sus derechos, libertades o integridad personal, se le impondrá pena de seis meses a un año de prisión, y de cincuenta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.	**Artículo 160 QUATER.** **La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una mitad cuando:** **I. El agente se valga de su profesión, empleo, cargo o comisión para cometer el delito;** **II. La víctima sea persona menor de dieciocho años, adulta mayor o con discapacidad;** **III. La conducta tenga como propósito la comisión de otro delito;**

	IV. Se produzca daño permanente a la salud física o psicológica de la víctima.

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

(Iniciativa 2 de los Antecedentes Legislativos: Diputada Adriana Padilla Mendoza)

TEXTO ACTUAL	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 163.- Derogado.	ARTÍCULO 163.- Comete el delito de sumisión química con fines delictivos quien, sin el consentimiento libre, expreso e informado de otra persona, administre, suministre, mezcle, incorpore o haga ingerir, inhalar, absorber o consumir sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, tóxicas. farmacológicas o cualquier otra sustancia idónea para alterar, disminuir o anular temporalmente la conciencia, voluntad, percepción, capacidad de resistencia o autodeterminación de la víctima con la finalidad de facilitar la comisión de un delito. A quien cometa este delito se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.
Sin correlativo	ARTÍCULO 163 BIS.- Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando: I. La victima sea mujer, niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad; II. El sujeto activo tenga con la víctima relación de parentesco, matrimonio, concubinato,

	confianza, amistad, subordinación, superioridad laboral, docente, médica, religiosa o cualquier otra que implique especial deber de cuidado o confianza; III. a conducta se realice en bares, centros nocturnos, restaurantes, hoteles, moteles. establecimientos mercantiles, eventos públicos, transporte público o plataformas digitales de transporte; IV. Se utilicen bebidas, alimentos medicamentos o productos destinados al consumo humano para administrar la sustancia: V. Se empleen sustancias de difícil detección toxicológica que generen pérdida parcial o total de memoria; VII. La conducta tenga como finalidad facilitar la comisión de delitos sexuales, trata de personas, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas, robo, extorsión. feminicidio o cualquier delito de alto impacto; o Cuando derivado de la sumisión química con fines delictivos se cometa algún otro delito, se impondrán las penas correspondientes a ambos ilícitos conforme a las reglas del concurso de delitos previstas en este Código. Si la conducta produjera lesiones, afectaciones psicológicas permanentes, daño neurológico o

	la muerte de la víctima, se aplicarán además las disposiciones correspondientes a dichos delitos. La administración de sustancias fines delictivos podrá con considerarse como circunstancia agravante en delitos sexuales y feminicidio cuando así corresponda conforme a este Código.
Sin correlativo	ARTÍCULO 163 TER.- Se equipara al delito de sumisión química con fines delictivos: I. La alteración deliberada de bebidas. alimentos, medicamentos o cualquier producto destinado al consumo humano, con el propósito de suministrarlo posteriormente a una persona para facilitar la comisión de un delito; II. El suministro de sustancias mediante engaño respecto de su naturaleza, contenido o efectos; III. La utilización de aerosoles, vaporizadores, dispositivos electrónicos, cigarros electrónicos o cualquier medio análogo con la finalidad prevista en I articulo 163; y IV. La posesión, preparación o distribución de sustancias destinadas específicamente para cometer conductas previstas en este Capítulo, cuando existan elementos objetivos que acrediten dicha finalidad. No será punible la administración de sustancias realizada con fines médicos, odontológicos,

	terapéuticos, científicos, farmacéuticos o de asistencia legítima, siempre que exista consentimiento válido de la persona o se actúe conforme a las disposiciones legales y sanitarias aplicables.

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente *Tabla Indicativa* que describe de manera concreta la intención de la y el legislador:

INICIALISTA	PROPUESTA	OBJETIVO
Diputado Ramón Vázquez Valadez.	Adicionar un Capítulo IX denominado "DE LA SUMISIÓN QUÍMICA", así como reformar los artículos 160 TER y 160 QUARTER al Código Penal para el Estado de Baja California.	Crear el tipo penal de la sumisión química.
Diputada Adriana Padilla Mendoza.	Reforma y adiciona los artículos 163, 163 BIS y 163 TER al Código Penal para el Estado de Baja California.	Crear el tipo penal de la sumisión química.

IV. Análisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer la legisladora o el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.

3. El diseño normativo debe privilegiar, en lo posible, la libertad. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica de las personas que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, se debe vigilar la congruencia normativa. En ese sentido es preciso analizarse si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del fin trascendente enunciado en la exposición de motivos.

Esta Comisión se aboca al estudio de constitucionalidad del proyecto que nos ocupa:

Como punto de partida del presente análisis, atendemos la especial relevancia el artículo 14 de nuestra Carta Fundamental:

> **Artículo 14.** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
> (...)
>
> En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
> (...)

Aunado a ello, el artículo 16 nos dice:

> **Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
> (...)

Asimismo, se hace referencia al artículo 22:

> **Artículo 22.** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Por otra parte, observamos el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, establece que la soberanía del pueblo reside exclusivamente en el pueblo y que, este tiene siempre el derecho de modificar la forma de su gobierno.

> **Artículo 39.** La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Respecto a la forma de gobierno, el artículo 40 del ordenamiento previamente citado, describe que es voluntad del pueblo Mexicano, constituirse en una República. La cual está compuesta por Estados libres y que son soberanos en todo lo concerniente en su régimen interior.

> **Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Continuando con la Carta Magna, el artículo 41, estipula que el pueblo ejerce su autoridad política a través de los Poderes de la Unión y los Estados y la Ciudad de México. La jurisdicción para ejercer la soberanía está determinada por la Constitución Federal y las Constituciones Estatales y de la Ciudad de México, siempre y cuando cumplan con los términos establecidos en el Pacto Federal.

> **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Así mismo el artículo 43 establece que la entidad representada por esta soberanía, Baja California, pertenece al Pacto Federal.

> **Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

Atendiendo a La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se establece en su artículo 4 que el Estado goza de libertad y soberanía en cuanto a su régimen interior, siempre respetando las limitaciones establecidas por la Constitución Federal. Además, mientras que el artículo 5 afirma que todo poder público proviene del pueblo y se instituye para el bienestar de éste.

ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

Después de un cuidadoso análisis, esta Comisión concluye que la propuesta legislativa objeto de estudio tiene sólidos fundamentos y bases constitucionales en los artículos 14, 16, 22, 39, 40, 41, 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los dispositivos 4 y 5 de la Constitución Política local. Por lo tanto, el análisis acerca de la viabilidad de la propuesta legislativa será abordado en la sección siguiente.

V. Consideraciones y fundamentos.

En primer término, esta Comisión advierte que los proyectos legislativos que son abordados en el presente Dictamen, al analizar sus contenidos, guardan entre sí una estrecha coincidencia temática, pues ambos se encaminan a fortalecer el Código Penal para el Estado de Baja California con la finalidad de establecer en el marco referido el delito de la sumisión química.

Por tal virtud, dada la relación antes referida y con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de esta Comisión, serán atendidas y resueltas de manera conjunta a través del presente instrumento, sin que ello sea obstáculo para analizar de forma particular cada una de las pretensiones.

Hecho lo anterior, se procederá a integrar un solo resolutivo con aquellas porciones normativas que hayan sido declaradas procedentes.

1. El Diputado Ramón Vázquez Valadez, presenta iniciativa que adiciona un Capítulo IX denominado "DE LA SUMISIÓN QUÍMICA", así como los artículo 160 TER y 160 QUARTER al Código Penal para el Estado de Baja California, con el objetivo de crear el tipo penal de sumisión química.

Las razones que detalló el inicialista en su exposición de motivos que motivan el cambio legislativo son las siguientes:

- La delincuencia en México ha evolucionado hacia modalidades más sofisticadas, entre ellas la sumisión química, consistente en administrar sustancias sin consentimiento para anular la voluntad de las víctimas y facilitar la comisión de otros delitos.

- La sumisión química se utiliza actualmente en delitos sexuales, robos y secuestros; además, su detección resulta difícil por los efectos de amnesia y la rápida desaparición de las sustancias del organismo, lo que favorece la impunidad.

- En Baja California se han documentado casos y testimonios relacionados con esta práctica en bares, centros nocturnos y eventos masivos, mientras que otras entidades federativas ya han incorporado figuras penales específicas para sancionarla.

- La iniciativa propone tipificar la sumisión química como delito autónomo para cerrar vacíos legales, fortalecer la protección de la dignidad y autonomía de las personas, mejorar la prevención y armonizar la legislación estatal con las tendencias nacionales.

Propuesta legislativa que fue hecha en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CAPITULO IX
DE LA SUMISIÓN QUÍMICA

Artículo 160 TER.
Comete el delito de sumisión química quien, sin consentimiento de la víctima, administre, haga ingerir o suministre por cualquier medio sustancias psicoactivas, narcóticas o análogas, con el propósito de disminuir o anular su voluntad, memoria o capacidad de resistirse.

A quien incurra en esta conducta se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 160 QUATER.
La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una mitad cuando:

I. El agente se valga de su profesión, empleo, cargo o comisión para cometer el delito;

II. La víctima sea persona menor de dieciocho años, adulta mayor o con discapacidad;

III. La conducta tenga como propósito la comisión de otro delito;

IV. Se produzca daño permanente a la salud física o psicológica de la víctima.

TRANSITORIO

ÚNICO. - La presente reforma de Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California.

2. Una vez revisados los motivos planteados en el análisis ofrecido por el inicialista y atendiendo la reforma que se pretende realizar, esta Comisión coincide con el planteamiento del autor a razón de los siguientes argumentos:

La conducta descrita representa una forma particularmente grave de violencia, pues no solamente afecta los bienes jurídicos que eventualmente resulten lesionados —*como la libertad sexual, el patrimonio, la libertad personal o la integridad física*—, sino que implica ***una agresión previa*** y autónoma dirigida a neutralizar la voluntad de la víctima mediante medios químicos, colocándola en una condición de absoluta vulnerabilidad.

La sumisión química constituye una afectación directa a la dignidad y salud humana, principio que representa la base y fundamento de todo nuestro sistema legal. La dignidad de la persona presupone la capacidad de autodeterminación y la posibilidad de adoptar decisiones libres respecto de su propio cuerpo y voluntad. En consecuencia, cualquier conducta encaminada a privar artificialmente a una persona de dicha capacidad merece una especial atención por parte de los medios sancionadores.

De igual manera, la protección de la libertad personal no debe entenderse exclusivamente como la ausencia de privación física de la libertad, **sino también como la garantía de conservar la capacidad de decidir libremente sobre los propios actos**. La administración de sustancias con la finalidad de generar estados de inconsciencia, sedación, desorientación o amnesia **constituye una forma de afectación a dicha libertad, pues impide a la víctima ejercer de manera efectiva su consentimiento y resistencia**.

Esta Comisión considera relevante señalar que diversos estudios y especialistas han documentado los efectos y riesgos asociados a la denominada sumisión química. Al respecto, la Dra. Claudia Alonso González, académica de la Universidad Iberoamericana Puebla y especialista en temas de género, define esta conducta como *el sometimiento de la voluntad de una persona mediante la administración de sustancias químicas, generalmente con el propósito de facilitar la comisión de delitos, particularmente agresiones sexuales y robos.* [1]

De acuerdo con la especialista, sustancias como el GHB (depresor del sistema nervioso central) [2], la escopolamina (utilizada en actos delictivos ya que anula la voluntad)[3] y diversas benzodiacepinas (relajantes musculares)[4] pueden provocar sedación rápida, pérdida de memoria, desorientación, dificultad para oponerse a instrucciones de terceros y alteraciones significativas de las capacidades cognitivas y volitivas de las personas. Tales efectos colocan a la víctima en una situación de especial vulnerabilidad, limitando o anulando temporalmente su capacidad de autodeterminación y resistencia.

Esta Comisión estima que dichas características adquieren relevancia jurídica, pues evidencian que, la afectación a la libertad e integridad de la persona se produce desde el momento mismo en que la sustancia es suministrada, **independientemente de que posteriormente se consume o no algún otro delito**. Además, la administración no consentida de estas sustancias puede generar consecuencias graves para la salud, incluyendo alteraciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, incrementando el riesgo para la integridad física e incluso para la vida de la víctima.

Asimismo, resulta especialmente relevante la observación realizada por la citada académica respecto al importante subregistro de estos hechos. Según refiere, **la pérdida parcial o total de memoria inducida por las sustancias dificulta que las víctimas puedan reconstruir**

---

[1] https://www.iberopuebla.mx/noticias/sumision-quimica
[2] https://www.childrensmn.org/educationmaterials/kids/article/14735/lo-que-necesitas-saber-sobre-las-drogas-el-ghb/
[3] https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/64566/64566_ft.pdf
[4] https://nida.nih.gov/es/areas-de-investigacion/opioides/las-benzodiacepinas-y-los-opioides

los acontecimientos, identificar a los responsables o formular denuncias precisas ante las autoridades. Esta circunstancia genera obstáculos adicionales para la investigación y sanción de los hechos, favoreciendo escenarios de impunidad.

Finalmente, así como señala el inicialista en su exposición de motivos, este tipo de conductas suele presentarse con mayor frecuencia en espacios de convivencia social como bares, centros nocturnos y eventos masivos, donde la administración de sustancias puede pasar inadvertida. Lo anterior confirma que la sumisión química constituye una problemática con características propias que demanda mecanismos específicos de prevención, detección e intervención por parte del Estado.

Por estas razones, esta Comisión considera que la información aportada por especialistas en la materia fortalece la necesidad de visibilizar esta modalidad de violencia y de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas adecuadas para su prevención, investigación y sanción, en protección de la dignidad, la libertad y la integridad de las personas.

3. En otro orden de ideas, es oportuno precisar que actualmente nuestro Código Penal ya reconoce la especial gravedad que representa el suministro de drogas, estupefacientes, psicotrópicos o agentes químicos a una víctima para facilitar la comisión de determinados delitos sexuales. Los artículos 178, 179, 180 Ter y 182 establecen agravantes específicas cuando para la realización de delitos como violación, abuso sexual o estupro se suministran a la víctima sustancias **capaces de alterar su estado de conciencia o disminuir su capacidad de resistencia**. Lo anterior evidencia que la legislación ha reconocido previamente el reproche a la acción que implica el empleo de medios químicos para vulnerar la autodeterminación de una persona.

> **ARTÍCULO 178.-** Violación impropia.- Se equipara a la violación, al que sin consentimiento de una persona o con el consentimiento de un o una menor de catorce años, introduzca uno o más dedos o un objeto de cualquier naturaleza en la región anal o vaginal, la pena será de ocho a quince años de prisión y hasta trescientos días multa, sin perjuicio de las penas que resulten de la comisión de otro u otros delitos.
>
> **ARTÍCULO 179.-** Agravación de la pena.- Cuando la violación fuere cometida con intervención directa o inmediata de dos o más personas, **o para su realización se le haya suministrado a la víctima drogas, estupefacientes, psicotrópicos o agentes químicos**, o el delito haya sido cometido dentro las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico

a otras personas, o hubiese sido cometido por ministros de culto religioso, la prisión será de quince a veintisiete años y hasta quinientos días multa; si en la comisión de este delito intervinieren uno o más menores, esta circunstancia no relevará de responsabilidad a los mayores, que participen en su comisión; a los demás se les aplicará las reglas contenidas en el artículo 16 de este Código.

ARTÍCULO 180.- Tipo y punibilidad.- Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de dos a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena se aumentará de dos a cuatro años de prisión.

ARTÍCULO 180 TER.- Agravación de la punibilidad.- Las penas previstas en los artículos 180 y 180 Bis, se aumentarán hasta en una mitad, cuando en el abuso sexual concurra alguna de las circunstancias siguientes:

V.- Cuando para su realización se le haya suministrado a la víctima drogas, estupefacientes, psicotrópicos o agentes químicos.

ARTÍCULO 182.- Tipo y punibilidad.- Al que realice cópula con persona mayor de catorce años de edad y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño se le impondrá de dos a seis años de prisión y hasta cien días multa.

Agravación de la punibilidad.- La pena se aumentará hasta una mitad más, cuando para la realización del delito **se le haya suministrado a la víctima drogas, estupefacientes, psicotrópicos o agentes químicos**, o el delito haya sido cometido dentro las instalaciones de alguna institución educativa, asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico u físico a otras personas, o cuando el sujeto activo del delito se haya valido de una relación de parentesco o posición jerárquica derivada de su relación docente, laboral, religiosa o doméstica.

Sin embargo, dichas disposiciones operan únicamente cuando el delito principal ha sido consumado o, cuando menos, se acredita la existencia de la conducta típica base. En otras palabras, la relevancia penal del suministro de sustancias se encuentra actualmente

subordinada a la demostración de otro delito, funcionando únicamente como una circunstancia agravante de la sanción.

Esta situación genera una zona de insuficiente protección jurídica respecto de aquellos supuestos en los que una persona administra sustancias psicoactivas, narcóticas o químicas sin consentimiento de la víctima con la finalidad de anular o disminuir su voluntad, porque la administración clandestina de dichas sustancias **constituye por sí misma una conducta objetivamente peligrosa para bienes jurídicos de máxima importancia**, que son la vida y la salud, independientemente de que posteriormente se consume una agresión sexual, un robo, privación de la libertad o cualquier otro ilícito.

Por todo lo anterior, esta Comisión estima jurídicamente razonable que el ordenamiento en análisis reconozca de manera independiente la conducta consistente en administrar sustancias destinadas a disminuir o anular la voluntad de una persona sin su consentimiento, sin perjuicio de que, cuando posteriormente se consumen otros delitos, dicha circunstancia pueda seguir operando como agravante o dar lugar a las reglas aplicables del concurso de delitos.

4. La Diputada Adriana Padilla Mendoza, presenta iniciativa que reforma y adiciona los artículos 160, 160 BIS y 160 TER al Código Penal para el Estado de Baja California, con el objetivo de crear el tipo penal de sumisión química.

Las razones que detalló la inicialista en su exposición de motivos que motivan el cambio legislativo son las siguientes:

- Existe una obligación constitucional y convencional del Estado de proteger la dignidad, libertad, integridad y seguridad de las personas, mediante medidas eficaces para prevenir y sancionar toda forma de violencia.

- La sumisión química consiste en administrar sustancias sin consentimiento para disminuir o anular la voluntad de una persona, colocándola en estado de indefensión y facilitando la comisión de diversos delitos.

- Actualmente existe un vacío normativo, ya que la conducta suele quedar subsumida en otros delitos, dificultando su investigación, sanción y visibilización, aun cuando por sí misma representa una grave afectación a bienes jurídicos fundamentales.

- Se propone crear un tipo penal autónomo para sancionar la sumisión química con fines delictivos, fortaleciendo la protección de la libertad, la autodeterminación y la integridad de las personas frente a nuevas formas de criminalidad.

Propuesta legislativa que fue hecha en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO 163.- Comete el delito de sumisión química con fines delictivos quien, sin el consentimiento libre, expreso e informado de otra persona, administre, suministre, mezcle, incorpore o haga ingerir, inhalar, absorber o consumir sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, tóxicas. farmacológicas o cualquier otra sustancia idónea para alterar, disminuir o anular temporalmente la conciencia, voluntad, percepción, capacidad de resistencia o autodeterminación de la víctima con la finalidad de facilitar la comisión de un delito.

A quien cometa este delito se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.

ARTÍCULO 163 BIS.- Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando:

I. La victima sea mujer, niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad;

II. El sujeto activo tenga con la víctima relación de parentesco, matrimonio, concubinato, confianza, amistad, subordinación, superioridad laboral, docente, médica, religiosa o cualquier otra que implique especial deber de cuidado o confianza;

III. La conducta se realice en bares, centros nocturnos, restaurantes, hoteles, moteles. establecimientos mercantiles, eventos públicos, transporte público o plataformas digitales de transporte;

IV. Se utilicen bebidas, alimentos medicamentos o productos destinados al consumo humano para administrar la sustancia:

V. Se empleen sustancias de difícil detección toxicológica que generen pérdida parcial o total de memoria;

VII. La conducta tenga como finalidad facilitar la comisión de delitos sexuales, trata de personas, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas, robo, extorsión. feminicidio o cualquier delito de alto impacto; o

Cuando derivado de la sumisión química con fines delictivos se cometa algún otro delito, se impondrán las penas correspondientes a ambos ilícitos conforme a las reglas del concurso de delitos previstas en este Código.

Si la conducta produjera lesiones, afectaciones psicológicas permanentes, daño neurológico o la muerte de la víctima, se aplicarán además las disposiciones correspondientes a dichos delitos.

La administración de sustancias fines delictivos podrá con considerarse como circunstancia agravante en delitos sexuales y feminicidio cuando así corresponda conforme a este Código.

ARTÍCULO 163 TER.- Se equipara al delito de sumisión química con fines delictivos:

I. La alteración deliberada de bebidas. alimentos, medicamentos o cualquier producto destinado al consumo humano, con el propósito de suministrarlo posteriormente a una persona para facilitar la comisión de un delito;

II. El suministro de sustancias mediante engaño respecto de su naturaleza, contenido o efectos;
III. a utilización de aerosoles, vaporizadores, dispositivos electrónicos, cigarros electrónicos o cualquier medio análogo con la finalidad prevista en I articulo 163; y

IV. La posesión, preparación o distribución de sustancias destinadas específicamente para cometer conductas previstas en este Capítulo, cuando existan elementos objetivos que acrediten dicha finalidad.

No será punible la administración de sustancias realizada con fines médicos, odontológicos, terapéuticos, científicos, farmacéuticos o de asistencia legítima, siempre que exista consentimiento válido de la persona o se actúe conforme a las disposiciones legales y sanitarias aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Cualquier referencia jurídica, administrativa o legislativa realizada al texto previamente derogado de los artículos adicionados mediante el presente Decreto se entenderá sin efectos respecto de su contenido anterior, debiendo aplicarse exclusivamente el texto vigente contenido en esta reforma.

5. Las consideraciones jurídicas desarrolladas respecto de la iniciativa analizada resultan igualmente aplicables a la diversa propuesta relativa a la tipificación de la sumisión química, toda vez que ambas parten de un mismo diagnóstico social, persiguen la protección de los mismos bienes jurídicos fundamentales y comparten la finalidad de sancionar de manera autónoma la administración no consentida de sustancias destinadas a disminuir o anular la voluntad de las personas.

En consecuencia, el estudio realizado en los **Considerandos 2 y 3** resultan suficientes para atender sustancialmente ambas propuestas legislativas, sin perjuicio de reconocer que una de ellas incorpora referencias adicionales a la teoría de los delitos de peligro y una delimitación más precisa del bien jurídico tutelado.

6. Ahora bien, revisado todo lo anterior, y como ya se ha adelantado, esta Comisión considera que la justificación principal de la incorporación del delito de **SUMISIÓN QUÍMICA** no debe descansar exclusivamente en la posibilidad de que la conducta sea utilizada como medio para la comisión de otros ilícitos, sino en la afectación inmediata y directa que produce sobre bienes jurídicos fundamentales desde el momento mismo en que la sustancia es administrada sin consentimiento de la víctima.

La administración deliberada de sustancias psicoactivas, narcóticas o de efectos similares en el organismo de una persona, sin su conocimiento o autorización, **genera por sí misma una situación de riesgo jurídicamente relevante para su vida, su salud, integridad**

física, integridad psíquica y libertad de autodeterminación. Dicho riesgo no depende de que posteriormente se consume una agresión sexual, un robo o cualquier otro delito, sino que surge desde el instante en que la sustancia es introducida al organismo de la víctima.

Lo anterior obedece a que quien administra una sustancia sin control médico, sin consentimiento y fuera de cualquier finalidad legítima, desconoce las condiciones particulares de salud de la persona afectada, sus antecedentes clínicos, posibles alergias, padecimientos preexistentes, tratamientos farmacológicos en curso o las interacciones que pudieran producirse con alcohol u otras sustancias. Como consecuencia, la víctima es expuesta a un peligro real e inmediato de sufrir alteraciones fisiológicas, afectaciones neurológicas, pérdida de conciencia, insuficiencias orgánicas, lesiones graves e incluso la muerte.

Desde esta perspectiva, el desvalor de la conducta no radica únicamente en la intención ulterior del sujeto activo, **sino en la creación de un riesgo prohibido para la salud e integridad de otra persona**. La lesión al bien jurídico comienza desde la administración misma de la sustancia, pues la víctima pierde el control sobre lo que ingresa a su organismo y queda expuesta a consecuencias potencialmente graves e imprevisibles.

Por ello, esta Comisión estima que condicionar la configuración del tipo penal a la acreditación de la finalidad de facilitar la comisión de otro delito podría restringir injustificadamente la protección que se pretende brindar. Existen supuestos en los que la administración ilícita de sustancias genera el mismo nivel de riesgo para la salud y la integridad de la víctima, aun cuando posteriormente no se consume o no pueda acreditarse la comisión de un ilícito diverso.

En consecuencia, se considera jurídicamente más adecuado que el tipo penal básico sancione la conducta consistente en administrar o suministrar sustancias sin consentimiento cuando éstas sean aptas para alterar la conciencia, voluntad o capacidad de resistencia de una persona.

Asimismo, se advierte que algunas de las expresiones utilizadas en las propuestas analizadas podrían generar dificultades interpretativas o de aplicación práctica. Por ejemplo, conceptos como "***sustancias análogas***", "***cualquier otra sustancia idónea***", "***sustancias de difícil detección toxicológica***" o referencias excesivamente amplias a lugares de comisión del delito, podrían introducir elementos de indeterminación incompatibles con los principios normados en nuestra constitución.

Asimismo, esta Comisión considera necesario evitar supuestos que puedan conducir a una expansión excesiva de la intervención penal. Particularmente, las propuestas relativas a sancionar la posesión, preparación o distribución de sustancias destinadas a la comisión futura del delito presentan riesgos de anticipación indebida de la tutela penal, al castigar actos preparatorios que, por sí mismos, podrían no representar todavía una afectación concreta al bien jurídico protegido.

De igual manera, se observa que algunas agravantes propuestas no guardan una relación directa con el incremento del desvalor de la conducta. Tal es el caso de aquellas que dependen exclusivamente del lugar donde ocurrieron los hechos o de relaciones personales cuya delimitación jurídica resulta imprecisa. Por ello, resulta conveniente que las circunstancias calificativas se concentren en supuestos objetivamente verificables y vinculados con una mayor vulnerabilidad de la víctima o un mayor reproche de la conducta.

Por otra parte, esta Comisión estima pertinente conservar aquellos elementos que constituyen el núcleo esencial de ambas iniciativas. En particular, resulta jurídicamente relevante reconocer que **la conducta sancionable consiste en administrar o suministrar sustancias sin consentimiento de la víctima con el propósito de disminuir o anular su capacidad de autodeterminación**. Para ello tenemos que:

- La palabra *administrar* proviene del latín *administrare*, que significa dirigir, aplicar o hacer uso de algo para un fin determinado. En el ámbito médico y farmacológico, ***administrar una sustancia*** implica introducirla o aplicarla directamente al organismo de una persona mediante cualquier vía de ingreso, por ejemplo: oral, intravenosa, intramuscular, inhalatoria, cutánea, sublingual. Por ello, el verbo *administrar* suele asociarse a una conducta más activa y directa sobre el cuerpo de la víctima.

- La palabra *suministrar* proviene del latín *subministrare*, que significa proporcionar, facilitar o poner algo a disposición de otra persona. Jurídicamente tiene un alcance más amplio que administrar, pues no necesariamente implica introducir directamente la sustancia en el organismo, sino ***proporcionarla o facilitarla para su consumo***. Entregar una bebida adulterada. Proporcionar una cápsula con una sustancia incapacitante. Facilitar una sustancia para que la víctima la ingiera creyendo que se trata de otra cosa. En estos casos el sujeto activo no necesariamente aplica la sustancia al cuerpo de la víctima, pero sí la pone a su disposición para que ésta la consuma.

Esta Comisión considera que la construcción del tipo penal debe centrarse primordialmente en la protección de la salud e integridad de las personas. Lo anterior obedece a que tanto la administración como el suministro de sustancias implican, de manera directa o indirecta, su incorporación al organismo de la víctima sin su consentimiento.

Desde ese momento se genera una puesta en peligro para la salud, pues quien realiza la conducta desconoce las condiciones médicas, fisiológicas o farmacológicas de la persona afectada, exponiéndola a riesgos de intoxicación, alteraciones físicas o psicológicas, lesiones graves e incluso la muerte.

Bajo tales consideraciones, la figura penal se estructuraría de la siguiente manera:

ARTÍCULO 160 SEPTIES.- Sumisión química.- Comete el delito de sumisión química quien, sin el consentimiento de la víctima, le administre, suministre o haga ingerir o introduzca por cualquier vía sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, anestésicas, tóxicas o cualquier otra sustancia para disminuir o anular su conciencia, voluntad o capacidad de resistencia. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

La pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando:

I. La víctima sea persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad;

II. El sujeto activo se valga de una relación de autoridad, confianza, guarda, custodia, atención médica, docencia o cualquier otra que implique un especial deber de protección respecto de la víctima;

III. Como consecuencia de la conducta se produzcan lesiones que afecten de manera permanente la salud de la víctima.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se comentan con motivo de la sumisión química.

Por lo que respecta a la ubicación propuesta para la incorporación del nuevo tipo penal, esta Comisión estima necesario realizar diversos ajustes por razones de técnica legislativa. En primer término, la primera iniciativa propone modificar la denominación del Capítulo IX para

identificarlo como **"De la Sumisión Química"**, así como adicionar los artículos 160 TER y 160 QUATER, sin embargo, se advierte que dicho capítulo actualmente corresponde a los **DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO**, mientras que los artículos 160 TER y 160 QUATER ya se encuentran vigentes y regulan las conductas de discriminación y hostigamiento.

Asimismo, de la revisión de la exposición de motivos no se desprende justificación alguna respecto de la derogación, reubicación o sustitución de dichos tipos penales, ni se explica la razón por la cual los artículos vigentes dejarían de regular las conductas actualmente previstas. En consecuencia, esta Comisión considera que dicha situación obedece a un error de técnica legislativa, mismo que puede ser subsanado durante el proceso de dictaminación.

Por otra parte, la segunda iniciativa plantea la adición de los artículos 163, 163 BIS y 163 TER dentro del **Título Segundo, DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, Capítulo Primero, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL**. No obstante, esta Comisión estima que dicha ubicación tampoco resulta plenamente congruente con la naturaleza jurídica de la conducta que se pretende sancionar.

Lo anterior obedece a que, conforme al análisis realizado, el núcleo del tipo penal no radica primordialmente en una afectación a la libertad ambulatoria de la víctima, sino en la administración o suministro no consentido de sustancias que generan un riesgo para su salud, integridad física, integridad psíquica y capacidad de autodeterminación. Por tanto, el bien jurídico tutelado guarda una relación más estrecha con la protección de la salud y la integridad personal que con las figuras tradicionales de privación de la libertad.

En virtud de lo anterior, esta Comisión considera técnicamente más adecuado incorporar la figura dentro del **Título Primero, Delitos contra la Vida, la Salud Personal y la Dignidad Humana**, específicamente en la **Sección Primera, Delitos contra el Individuo**, mediante la creación de un **Capítulo XIV denominado "De la Sumisión Química"**, adicionando para tal efecto un nuevo artículo 160 SEPTIES y los subsecuentes que resulten necesarios.

Sirvan los siguientes criterios para abonar al contenido desarrollado en el presente proyecto:

> **PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE.**

La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.

1a./J.32/2011 (10a.)	Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	Registro digital: 162318
Primera Sala	Tomo XXXIII, Abril de 2011	Pág. 228	Constitucional

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO.

El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación

positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.

2a./J. 35/2019 (10a.)	S.J.F. y su Gaceta	Décima Época	Registro digital: 2019325
Segunda Sala	Tomo I, Febrero de 2019	Pg. 980	Constitucional

PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.

El legislador al crear las penas y el sistema para la imposición de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el de la proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados constitucionales. La proporción entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo. Esto permite advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justifique, en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, cuáles son las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas, para cuando una persona despliega una conducta considerada como delito. Lo anterior, permitirá que en un problema de constitucionalidad de leyes, se atienda a las razones expuestas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo relatado adquiere relevancia si se toma en consideración que al corresponderle al legislador señalar expresamente las razones de mérito, el órgano de control constitucional contará con otro elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos impugnados.

Tesis: 1a./J. 114/2010	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.	Novena Época	Registro digital: 163067

Primera Sala	Tomo XXXIII, Enero de 2011	página 340	Penal, Constitucional

5. El presente Dictamen cubrió el principio de exhaustividad, toda vez que fueron analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por la y el inicialista.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, el texto propuesto por la y el inicialista resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores jurídicos y axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace a la misma jurídicamente PROCEDENTE, en los términos precisados en el cuerpo del presente Dictamen.

VI. Propuestas de modificación.

Las modificaciones quedaron debidamente solventadas en el cuerpo del presente.

VII. Régimen Transitorio.

El régimen transitorio es el adecuado.

VIII. Impacto Regulatorio.

No es necesario armonizar con otros instrumentos jurídicos.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión de Justicia, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba la reforma que crea un CAPÍTULO XIV, denominado "DE LA SUMISIÓN QUÍMICA" al TÍTULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD PERSONAL Y DIGNIDAD HUMANA, de la SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO EN EL LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL, adicionándole el artículo 160 SEPTIES al Código Penal para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XIV
DE LA SUMISIÓN QUÍMICA

ARTÍCULO 160 SEPTIES.- Sumisión química.- Comete el delito de sumisión química quien, sin el consentimiento de la víctima o sin causa justificada, le administre, suministre o haga ingerir o introduzca, por cualquier vía sustancias psicotrópicas, narcóticas, sedantes, anestésicas, tóxicas o cualquier otra sustancia para disminuir o anular su conciencia, voluntad o capacidad de resistencia. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando:

I. La víctima sea persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad;

II. El sujeto activo se valga de una relación de autoridad, confianza, guarda, custodia, atención médica, docencia o cualquier otra que implique un especial deber de protección respecto de la víctima; y,

III. Como consecuencia de la conducta se produzcan lesiones que afecten de manera permanente la salud de la víctima.

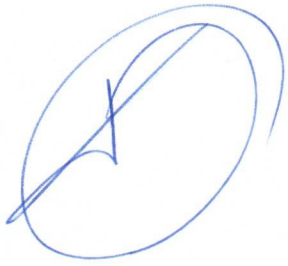
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que se cometan con motivo de la sumisión química.

ARTÍCULO TRANSITORIO

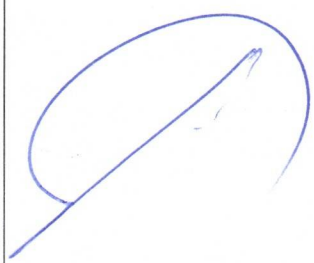
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en sesión de trabajo a los 14 días del mes de octubre de 2026.
"2026, Año de la Educación para la Construcción de la Paz"

COMISIÓN DE JUSTICIA
DICTAMEN No. 32

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. NORMA ANGÉLICA PEÑALOZA ESCOBEDO P R E S I D E N T A			
DIP. ADRIAN HUMBERTO VALLE BALLESTEROS S E C R E T A R I O			
DIP. JAIME EDUARDO CANTÓN ROCHA V O C A L			
DIP. JUAN DIEGO ECHEVARRÍA IBARRA V O C A L			

COMISIÓN DE JUSTICIA
DICTAMEN No. 32

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. GABRIELA PONCE VELAZQUEZ V O C A L			
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA V O C A L			
DIP. JESÚS DANIEL RAZO CÓRDOVA V O C A L			

DICTAMEN No. 32– Código Penal para el Estado de Baja California – delito de sumisión química.

DCL/HICM/IGL/CACG*